



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

**Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y
Procesal**

Área de Derecho Procesal

Curso 2017/2018

EL PROCESO MONITORIO Y LA PROTECCIÓN PROCESAL DEL CRÉDITO EN ESPAÑA

Nombre del/la estudiante: Selena Tierno Barrios

Tutor: Dr. D. Adán Carrizo González-Castell

Mes: Junio

Año: 2018

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

**Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y
Procesal**

Área de Derecho Procesal

**EL PROCESO MONITORIO Y LA
PROTECCIÓN PROCESAL DEL
CRÉDITO EN ESPAÑA**

**THE SMALL CLAIMS COURT AND
THE PROCEDURAL PROTECTION
OF CREDIT IN SPAIN**

Nombre del/la estudiante: Selena Tierno Barrios

e-mail del/a estudiante: selenatierno@usal.es

Tutor/a: Dr. D. Adán Carrizo González-Castell

RESUMEN (15 líneas)

Este trabajo va dirigido a analizar las diferentes vías que existen en nuestro ordenamiento jurídico para lograr la satisfacción de los derechos de crédito de los acreedores, que tendrán que recurrir, en la mayoría de las ocasiones, a la tutela judicial para reclamar una determinada cantidad de dinero a un deudor que, por diferentes razones, no hace frente al pago de la misma.

En este sentido, teniendo como punto de partida la situación de morosidad, se han establecido, a través de leyes internas y reglamentos comunitarios, diversos mecanismos cuya finalidad es una protección rápida y eficaz del derecho de crédito, y así nos encontramos, por un lado, con el proceso monitorio en sus distintas modalidades, el proceso de desahucio y el juicio cambiario; y por otro lado, el proceso monitorio europeo y el de escasa cuantía en la Unión Europea. Además, se hace mención al proceso declarativo y ejecutivo ordinario para comparar las ventajas e inconvenientes con las otras instituciones.

Sin embargo, aunque existe todo un abanico de posibilidades, el problema de la insolvencia e insuficiencia del deudor se presenta como un problema infranqueable que hace que el proceso más tramitado y exitoso en este ámbito, el monitorio, se frustre en este escollo.

PALABRAS CLAVE (entre 3 y 6): proceso, monitorio, morosidad, deuda

ABSTRACT

This paper is aimed at analyzing the different ways that exist in our legal system to reach the satisfaction of creditors' credit claims, who will have to resort, in most cases, to judicial protection to claim a certain amount of money to a debtor who doesn't pay it because of different reasons.

In this way, the default situation has made that we have, through domestic laws and european community regulations, different methods whose aim is a fast and effective protection of credit claim, so on the one hand, we have the Small Claims Court in its different modalities, the eviction process and the exchange trial; and on the other hand, the European Payment Order procedure and the Small Claims procedure, both of them in the European Union. Moreover, the ordinary declarative and executive process is also included to compare the advantages and disadvantages with the other legal institutions.

However, although there is a wide range of possibilities, the problem of insolvency and insufficiency of the debtor is highlighted as an insurmountable problem that makes that the most used and successful process in this area, the Small Claims Court, is frustrated in this stumbling block.

KEYWORDS: process, Small Claims Court, default, debt

“La morosidad, como fenómeno social, no proviene precisamente por la Administración de Justicia, sino por los propios morosos, y en muchas ocasiones el elevado número y resistencia de los mismos es reflejo fiel no sólo de posibles influencias de crisis económicas, sino de un déficit y laxitud cultural y moral de la propia sociedad.”

QUÍLEZ MORENO, J. M., *EL PROCESO MONITORIO: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la e-Justicia*, LA LEY, Madrid, 2011

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. ESPECIAL REFERENCIA AL PROCESO MONITORIO	7
2.1.- El proceso monitorio en la Ley de Enjuiciamiento Civil.....	7
2.1.1.- Origen, evolución y reformas legislativas.....	7
2.1.2.- Concepto y caracteres. Naturaleza jurídica y fundamento	11
2.1.3.- Ámbito de aplicación, presupuestos y requisitos	14
2.1.4.- Competencia.....	17
2.1.5.- Postulación	20
2.1.6.- Inicio del procedimiento, desarrollo y formas de terminación.....	21
2.2.- Especialidades en propiedad horizontal	28
2.3.- El procedimiento monitorio notarial.....	33
3. OTROS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN PROCESAL DEL CRÉDITO EN ESPAÑA.....	35
3.1.- Procesos declarativos	35
3.2.- Procesos ejecutivos	39
4. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN PROCESAL DEL CRÉDITO EN LA UNIÓN EUROPEA.....	41
5. CONCLUSIONES	43
6. BIBLIOGRAFÍA	45

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es analizar los diferentes cauces procesales disponibles en la legislación española a los que puede acudir un acreedor que pretende la satisfacción de su derecho de crédito. Como se verá, existe todo un abanico de posibilidades, cada una con sus particularidades, ventajas e inconvenientes.

Así, en primer lugar, hago un examen detallado del proceso monitorio, proceso por excelencia, el más utilizado y el que más se tramita en los juzgados de nuestro país en lo referente a esta materia. De esta forma, analizo la regulación que establece la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) con los problemas e interpretaciones más importantes que han ido surgiendo desde su incorporación, la regulación especial que se hace en el ámbito de la propiedad horizontal, y la última versión relativa al procedimiento monitorio notarial¹.

De este modo, y como primera toma de contacto con el tema que voy a abordar, para llegar a comprender verdaderamente la justificación y finalidad del proceso monitorio, hay que situarse en un contexto en que la tasa de morosidad era demasiado elevada como para no dar una respuesta adecuada y eficaz a aquellas situaciones en las que, simple y llanamente, el ciudadano que debía una determinada cantidad de dinero no pagaba porque no quería pagar, ya que obtenía un mayor beneficio económico si optaba por hacer caso omiso y esperar a que el acreedor, o bien desistiera de satisfacer su derecho, o bien acudiera a la tutela judicial, pero mientras tanto, el deudor seguía manteniendo la misma situación patrimonial. Así, frente a esta pasividad por la que optaban muchos ciudadanos, se reforzó la posición del acreedor, y de esta forma, se introdujo en el Ordenamiento Jurídico el proceso monitorio, con la intención de que el deudor se viera obligado a pagar o a comparecer formulando oposición si no quería que directamente se diera paso a la ejecución, de forma que para cualquier actuación que no fuera la de comparecer no iba a existir ni siquiera intervención judicial. Sin embargo, este no es el contexto de hoy día, sino que actualmente la situación ha dado un giro de 360 grados, de forma que la mayoría de los ciudadanos que no pagan no es porque no quieran pagar, sino porque realmente no pueden, y es por eso que en este nuevo contexto haya que tener más empatía y sensibilidad frente a estos ciudadanos, y que la posición reforzada del acreedor, no sólo en el proceso monitorio sino generalmente en todos los procesos en los que rige la técnica monitoria,

¹ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («BOE» núm. 7, de 08/01/2000).

no lo sea tanto, y así se ha intentado dar nuevas respuestas a través de las últimas medidas dirigidas a la protección de los deudores hipotecarios².

No obstante, no hay que olvidar que hoy día sigue habiendo ciudadanos que, aprovechándose de la solidaridad y benevolencia existente frente a esas personas y familias en situación de vulnerabilidad, continúan no queriendo atender sus obligaciones y no pagar porque sencillamente no está dentro de sus pretensiones pagar sus deudas, y es esta situación, la cual he experimentado personalmente, la que captó mi atención sobre la protección del crédito y me llevó a elaborar este trabajo.

A continuación, hago un recorrido por otros instrumentos existentes en España para la protección procesal del crédito, distinguiendo para ello entre procesos declarativos, como el proceso de desahucio en arrendamientos, el juicio cambiario y los procesos declarativos ordinarios correspondientes por razón de la cuantía; y procesos ejecutivos, centrando mi atención en el proceso ejecutivo ordinario con las particularidades previstas para la ejecución dineraria, y en el proceso de ejecución hipotecaria.

Una vez abordados estos aspectos, he decidido hacer una pequeña referencia a los instrumentos creados en el seno de la Unión Europea, entre ellos, el proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía.

Por último, concluyo este trabajo tal y como empecé, es decir, con el proceso monitorio, analizando su eficacia, si verdaderamente consigue su objetivo de que las deudas reclamadas sean rápidamente cobradas, o al menos, si realmente se logra una satisfacción de los créditos.

2. ESPECIAL REFERENCIA AL PROCESO MONITORIO

2.1.- El proceso monitorio en la Ley de Enjuiciamiento Civil

2.1.1.- Origen, evolución y reformas legislativas

El proceso monitorio se introdujo en España, por exigencias de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a través de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la cual incorporó en el Libro IV, dedicado

² DAMIÁN MORENO, J., “El impacto del proceso monitorio en tiempos de crisis. Monitorialismo y panmonitorialismo”, *Revista El Cronista del Estado Social Y Democrático de Derecho*, 2014, p. 1-2 y 7-8.

a los procesos especiales, el Título III relativo al proceso monitorio y cambiario. Así pues, el proceso monitorio se reguló en los artículos (arts.) 812-818 LEC, configurándose como una vía dirigida a la protección rápida y eficaz del crédito dinerario líquido de los acreedores, sobre todo de empresarios y profesionales³.

Sin embargo, debido al éxito que tuvo este procedimiento desde su regulación y al elevado índice de utilización en los últimos años, no ha sido ajeno a reformas legislativas que han intentado tanto solventar cuestiones prácticas puestas de manifiesto en los tribunales como aumentar su eficiencia⁴.

En este sentido, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, supuso la atribución de competencias a los Secretarios Judiciales, actualmente denominados Letrados de la Administración de Justicia tras la reforma que lleva a cabo la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de forma que, estos últimos son competentes para admitir el escrito de petición inicial del proceso monitorio siempre que los documentos que se adjunten con esta petición sean los que establece expresamente el artículo (art.) 812.2 LEC o constituyan un principio de prueba del derecho del acreedor; de otra forma, dará traslado al juez para que sea este último quien decida sobre la admisión de la petición inicial⁵.

Igualmente, el Letrado de la Administración de Justicia, será competente, siempre que lo sea para la admisión del escrito de petición inicial, para la tramitación de todo el procedimiento.

En segundo lugar, otra modificación que llevó a cabo la presente ley fue establecer la prohibición de que el requerimiento al demandado se efectúe mediante edictos en todos aquellos supuestos que no sean los relativos a propiedad horizontal, ya que en la redacción originaria de la LEC no se establecía expresamente y daba lugar a dudas.

³ Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales («DOCE» núm. 200, de 8 de agosto de 2000).

Apartado XIX párrafo 6º Exposición de Motivos Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

⁴ GONZÁLEZ PILLADO, E., “El juicio monitorio en España tras las últimas reformas procesales”, *Revista de Estudios de la Justicia*, 2012, p. 55.

⁵ Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («BOE» núm. 266, de 4 de noviembre de 2009).

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE» núm. 174, de 22 de julio de 2015).

Véase el art. 815.1 párrafo 1º LEC, relativo a la admisión de la petición inicial.

En tercer lugar, la LEC en su redacción original ya ponía de manifiesto en su Exposición de Motivos que, a diferencia de la regulación del proceso monitorio en otros países en los que no se establece un límite por razón de la cuantía, en España se optó por lo contrario, de forma que no se tramitaran reclamaciones de deudas elevadas. En este sentido, el antiguo art. 812.1 LEC establecía un límite de cinco millones de pesetas, es decir, aproximadamente 30.000 euros, por lo que la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, incrementó el límite a 250.000 euros⁶.

En último lugar, hay que destacar que la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, dio uniformidad a las formas de terminación del proceso monitorio a través del decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia.

Posteriormente, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, añadió el actual apartado tercero del art. 818 LEC, el cual establece que, en el supuesto de rentas impagadas o debidas por parte del arrendatario de una finca urbana, siempre y en todo caso, cuando exista oposición de este último, habrá que acudir al juicio verbal, independientemente de la cuantía. En este sentido, esto se relaciona con lo dispuesto en los arts. 249.1.6º y 250.1.1º LEC, los cuales establecen que se tramitarán por el juicio ordinario las demandas relativas a asuntos sobre arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, y por el juicio verbal, las que versen sobre una reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas o pretendan el desahucio⁷.

Más tarde, la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, añadió el párrafo tercero del art. 813 LEC, relativo a la determinación de la competencia territorial en el supuesto de no hallar el domicilio o residencia del deudor tras las averiguaciones que realice el Letrado de la Administración de Justicia, o bien, el deudor se encuentre en otro partido judicial, siendo la consecuencia en ambos casos la terminación del proceso por auto del juez, pudiendo el acreedor iniciar un nuevo proceso ante el juez competente⁸.

⁶ Apartado XIX párrafo 10º Exposición de Motivos Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

⁷ Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2009).

⁸ Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía («BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2011).

Por otra parte, esta ley también añadió el apartado tercero del art. 815 LEC, estableciendo que, si la cantidad que se reclama no es correcta, el Letrado de la Administración de Justicia deberá dar traslado al juez para que, mediante auto, pueda plantear al acreedor que este acepte o rechace una propuesta de requerimiento de pago por importe inferior al que se había solicitado en un principio.

También modificó una cuestión íntimamente relacionada con el proceso monitorio debido a la influencia del proceso europeo de escasa cuantía, que consistió en elevar la cuantía de 900 a 2.000 euros ampliando, así pues, el límite cuantitativo para el que no es preceptiva la postulación, lo cual influye en el proceso monitorio en el caso de oposición del deudor. En este sentido, por tanto, también se modificó el art. 539.1 párrafo 2º LEC, estableciendo la necesidad de postulación en el proceso de ejecución, en los supuestos de procesos monitorios sin oposición del deudor, cuando la cantidad por la que se despache la ejecución supere los 2.000 euros⁹.

Además, también modificó la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en concreto, el art. 35 relativo a la “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo”, actualmente derogado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, modificación que supuso incluir como hecho imponible de la tasa el proceso monitorio, es decir, la petición inicial, ya que la Orden HAC 661/2003 (actualmente derogada) que desarrollaba la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, lo declaraba exento, salvo que debido a la oposición del deudor hubiera que tramitarse el asunto por el juicio ordinario¹⁰.

En el mismo año, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, supuso una reforma importante, ya que suprime el límite cuantitativo de la deuda que se

⁹ GÓMEZ AMIGO, L., “La evolución del proceso monitorio. En particular, su reforma por la ley 42/2015, de 5 de octubre”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2017, p. 5

¹⁰ Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 2002).

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses («BOE» núm. 280, de 21/11/2012).

Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación («BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 2003).

pretenda reclamar, en este sentido, el actual art. 812.1 LEC establece que la deuda dineraria podrá ser de cualquier importe¹¹.

Por otro lado, añade un requisito más a los que establecía la LEC en su redacción original, y que no es otro sino que la deuda debe ser líquida. En este sentido, el art. 572 LEC, relativo a la ejecución dineraria establece que para el despacho de la ejecución habrá de entenderse por líquida aquella cantidad de dinero que sea determinada, de forma que venga expresada en el título de ejecución con letras, cifras o guarismos comprensibles.

En último lugar, hay que destacar la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ya que, por un lado, modifica el art. 815.1 párrafo 1º LEC, estableciendo que el deudor, en caso de oposición, deberá alegar en el escrito de la misma las razones por las que crea que no debe la cantidad reclamada de forma fundada y motivada, ya que en la redacción original de la LEC sólo se exigía una alegación sucinta. Por otro lado, añade un apartado cuarto al art. 815 LEC, estableciendo así la posibilidad de un control judicial de oficio de las cláusulas abusivas insertas en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario debido a la exigencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había declarado en su jurisprudencia que el proceso monitorio regulado en la LEC contravenía la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, ya que hasta entonces únicamente se permitía dicho control en el proceso ejecutivo ordinario e hipotecario desde la reforma de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Finalmente, modifica el art. 816.1 LEC y así establece que no es necesario que transcurra el plazo de veinte días requerido en el art. 548 LEC en materia de ejecución de resoluciones procesales, arbitrales y acuerdos de mediación¹².

2.1.2.- Concepto y caracteres. Naturaleza jurídica y fundamento

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a la hora de regular el proceso monitorio no ha ofrecido una definición del mismo, sino que únicamente recoge los presupuestos que han de darse para instarlo.

¹¹ Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal («BOE» núm. 245, de 11/10/2011).

¹² Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («BOE» núm. 239, de 6 de octubre de 2015).

FORTEA GORBE, J. L., “La reforma del proceso monitorio”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2015, p. 1-7.

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores («DOCE» núm. 95, de 21 de abril de 1993).

En este sentido, se pueden encontrar definiciones elaboradas por la doctrina, y así un concepto de proceso monitorio podría ser el de un proceso especial cuya finalidad es la creación, de forma rápida, de un título de ejecución a partir de un documento privado y a través del traslado de la posibilidad de instar un proceso contradictorio del actor al demandado, con efectos de cosa juzgada¹³.

Así definido, se caracteriza por ser un proceso especial porque, independientemente de que pueda calificarse como un proceso declarativo o ejecutivo, recibe una regulación distinta por parte de la LEC, lo que hace que, tanto su estructura como su tramitación, presente particularidades con respecto a la regulación establecida con carácter general.

Es también un proceso especial que conlleva la rápida creación de un título de ejecución con el que directamente se abre la vía ejecutiva contra el deudor en caso de que este no comparezca y no formule oposición, es decir, en este supuesto, el requerimiento de pago adquiere de forma inmediata fuerza ejecutiva, de modo que el acreedor únicamente necesita este título para instar el despacho de ejecución, efecto propio de la técnica monitoria. En este sentido, la creación de forma rápida de un título de ejecución se debe a que el acreedor se ahorra la tramitación de todo un proceso declarativo ordinario sin intervención de aquel al que se reclama la deuda.

El proceso monitorio parte de un documento privado porque para acudir a esta vía se requiere que la deuda que se reclama aparezca acreditada en uno de los documentos establecidos en su regulación o en cualquier otro que constituya un principio de prueba del derecho del acreedor¹⁴.

Se caracteriza por la “inversión de la iniciativa del contradictorio” porque está en manos del deudor o demandado, con su conducta en la formulación de oposición, hacer que el proceso monitorio se transforme en un proceso declarativo ordinario, de forma que si esto sucede así, la deuda pasará a ser discutida, de modo que desde este momento entra en juego el principio de contradicción entre las partes con los correspondientes procedimientos de prueba por parte del actor y demandado que se tramitarán conforme al proceso declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía¹⁵.

¹³ CORREA DELCASSO, J. P., “El proceso monitorio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Revista jurídica galega*, 2000, p. 272.

¹⁴ Véase el art. 812.1 LEC, referente a los presupuestos de aplicación.

¹⁵ GÓMEZ AMIGO, L., “La evolución...”, op., cit., p. 2.

Por último, el requerimiento de pago convertido en título de ejecución en caso de no oposición por parte del deudor tiene también efectos materiales de cosa juzgada, es decir, si este último no se opuso cuando pudo haberlo hecho no se podrá volver a instar otro proceso entre las mismas partes con el mismo objeto y causa.

En cuanto a su naturaleza jurídica, el proceso monitorio podría calificarse, bien como un proceso ejecutivo, bien como un proceso declarativo, ya que por un lado, si se observa lo que prescribe el art. 816 LEC en tanto en cuanto, en caso de que el deudor no pague y no se oponga, el proceso finaliza dando la posibilidad al acreedor para que inste el despacho de ejecución, y si además se tiene en cuenta la tramitación abreviada que caracteriza a este proceso junto con el requerimiento de pago que se dirige hacia el deudor, hace pensar en el proceso monitorio como un proceso de naturaleza ejecutiva.

En este sentido, se puede alegar también la técnica monitoria que rige este proceso, en tanto que, si el deudor no atiende al requerimiento de pago, directamente, sin necesidad de un procedimiento declarativo previo de contradicción entre las partes, se abre un proceso de ejecución con la correspondiente creación de un título ejecutivo, es decir, de forma directa, el requerimiento de pago adquiere fuerza ejecutiva, por lo que el proceso monitorio, desde esta perspectiva consistiría básicamente en un procedimiento de apremio de los bienes embargados del deudor para satisfacer el derecho de crédito del acreedor¹⁶.

Sin embargo, por otro lado, para que se haga efectiva la fuerza ejecutiva que caracteriza al monitorio es necesario que se dé una determinada actitud por parte del deudor, es decir, que no atienda al requerimiento de pago y no se oponga, por lo que, desde este punto de vista, el proceso monitorio podrá calificarse como un proceso declarativo desde el momento en que se presenta el escrito de petición inicial por parte del acreedor, y sería un proceso declarativo especial por la distinta regulación, estructura y trámites abreviados que le son propios. En este sentido, será la actitud que lleve a cabo el deudor la que hará cambiar la naturaleza del proceso, convirtiéndolo en un proceso ejecutivo en caso de incomparecencia y no oposición del mismo, o bien en un proceso declarativo ordinario si

¹⁶ QUÍLEZ MORENO, J. M., “El proceso monitorio: aspectos relativos a su fundamento y naturaleza Jurídica”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2011, p. 5.

este último se opone a la cantidad que se le reclama, tramitándose por el juicio ordinario o por el juicio verbal dependiendo de la cantidad de la deuda que se pretende satisfacer¹⁷.

En último lugar, el fundamento de este proceso hace referencia a una vía procesal rápida y adecuada para el reclamo de deudas no discutidas por parte, tanto de empresarios y profesionales como de particulares, en el sentido de que no desistan de satisfacer un derecho de crédito por la sencilla pero no insignificante razón de abrir un proceso judicial que no sería otro que el proceso declarativo ordinario, que puede resultar en ocasiones más desventajoso, no solo por los costes económicos sino también por el tiempo que trascurra hasta su resolución para los ciudadanos que únicamente desean reclamar una deuda. Pero, además, este proceso supone favorecer una buena Administración de Justicia, en tanto en cuanto ahorra gastos de dinero público, tiempo y exceso de trabajo a esta última, lo que se traduce en un aspecto positivo para el resto de procesos en los que hay que seguir los cauces ordinarios¹⁸.

2.1.3.- Ámbito de aplicación, presupuestos y requisitos

Atendiendo a la primera disposición que hace la LEC en el art. 812.1, el proceso monitorio se aplica, alternativamente al proceso declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía, para satisfacer el derecho de crédito del acreedor, lo cual se deduce del término empleado (“podrá”), es decir, deja en manos del actor acudir de forma facultativa a este proceso especial en aquellos supuestos en los que se pretenda reclamar el pago de una deuda, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la regulación.

Para iniciar este proceso, por tanto, deben darse una serie de presupuestos atendiendo, por un lado, a la deuda, y por otro lado, a los documentos que sirven de base al requerimiento de pago.

En primer lugar, la deuda que se reclame debe ser dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible.

- Deuda dineraria: la pretensión que plantee el acreedor debe ser de condena dineraria, no puede ser de otra naturaleza que no sea la de hacer entrega de una cantidad de dinero, como pueden ser las que consistan en dar cosas específicas o

¹⁷ ABELLA LÓPEZ, J., “Oposición del deudor al proceso monitorio y posterior proceso declarativo: nexos y vinculaciones”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2014, p. 2-3.

¹⁸ GÓMEZ AMIGO, L., “La evolución...”, op., cit., p. 2.

en obligaciones de hacer o no hacer. De este modo, se excluyen también las deudas de valor y las reclamaciones de tipo extracontractual¹⁹.

- Deuda líquida: atendiendo a lo previsto en la regulación de la ejecución dineraria, el art. 572.1 LEC establece que cualquier cantidad de dinero que esté determinada y venga expresada con letras, números o guarismos comprensibles será considerada líquida.
- Deuda determinada: en este aspecto, el término “determinada” hace referencia a que la deuda consista en una cantidad de dinero concreta y específica, o que pueda determinarse de una forma simple o a través de una operación aritmética²⁰.
- Deuda vencida: este término hace referencia a la deuda en la que el plazo de pago ha concluido, teniendo en cuenta el art. 1125 del Código Civil (CC), es decir, aquella cuyo día de vencimiento ha llegado²¹. En este sentido, se excluyen las deudas de futuro o aquellas que venzan una vez interpuesto el escrito de la petición inicial del proceso monitorio, lo cual es importante destacar, sobre todo, en el ámbito de la propiedad horizontal, en el que no se podrá conminar al deudor que habitualmente no cumple sus obligaciones a pagar la cuota de participación correspondiente al piso o local del que sea propietario, sino que se tendrá que instar un nuevo proceso cada vez que deba una cantidad determinada de dinero para la que ya haya transcurrido el plazo de pago de la misma.
- Deuda exigible: en este punto, vuelve a ser el Código Civil el que en su art. 1113 describa lo que ha de entenderse por deuda exigible, el cual establece que una obligación será exigible cuando su cumplimiento no sea dependiente de un acontecimiento futuro o incierto, o incluso pasado si los interesados lo ignoran, y también cuando incluya una condición resolutoria.
- Deuda de cualquier importe: desde la reforma impulsada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ya no se establece ningún límite cuantitativo a la deuda que pretenda reclamar el acreedor.

¹⁹ QUÍLEZ MORENO, J. M., *EL PROCESO MONITORIO: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la e-Justicia*, LA LEY, Madrid, 2011, p. 63-64, 67-68 y 71.

²⁰ MARTÍN JIMÉNEZ, C. M., *Teoría y práctica del proceso monitorio. Comentarios y formularios*, LEX NOVA, Valladolid, 2013, p. 143.

²¹ En este sentido, resulta de interés el Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª), de 14 de abril de 2003.

En segundo lugar, los documentos que son base de la petición serán aquellos en los que generalmente se ven reflejados las relaciones comerciales en el tráfico²². De esta forma, el art. 812.1 y 2 LEC dispone que la deuda deberá encontrarse acreditada en alguno de los siguientes documentos:

- Cualquier documento independientemente de su forma, clase y soporte físico en que se plasme. En este sentido, se trata de un documento que ha sido reconocido por el deudor a través de su firma, sello, marca o señal física o electrónica.
- Cualquier documento creado unilateralmente por el acreedor sin que sea necesario que conste la firma del deudor en el que generalmente se reflejen los créditos y las deudas derivadas de las relaciones existentes entre actor y demandado, como pueden ser facturas, albaranes, telegramas, certificaciones, etc.
- Documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera, siempre y cuando se aporten conjuntamente con el documento donde se acredite la deuda (art. 812.2.1º LEC).
- Certificaciones en las que se haga constar el impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de bienes inmuebles urbanos (art. 812.2.2º LEC), de los que hablaré en el siguiente apartado relativo a las especialidades de proceso monitorio en el ámbito de la propiedad horizontal.

Este presupuesto consistente en que la deuda esté debidamente acreditada en un documento hace que el proceso monitorio sea calificado como un proceso documental, ya que esto se exige como presupuesto imprescindible para poder tramitar este proceso; sin embargo, hay que destacar que el juez no puede llevar a cabo un juicio valorativo sobre la fuerza probatoria del documento acreditativo de deuda, sino que únicamente podrá realizar una valoración de la regularidad formal del mismo, y de que constituya un principio de prueba, es decir, no se requiere que el documento haga prueba plena en juicio o que sea considerado auténtico, lo cual resulta mucho más sencillo en el supuesto que establece el art. 812.2.1º LEC, esto es, cuando existe una relación previa entre deudor y acreedor y se aportan los documentos que reflejan esta última.

²² ASECIO MELLADO, J. M., *Derecho Procesal Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 624.

Además, la lista ejemplificativa que dispone el art. 812 LEC es sólo eso, es decir, no se establece un número cerrado o *numerus clausus* de documentos que puedan servir de base al requerimiento de pago del deudor, lo cual se deduce del art. 815.1 párrafo 1º LEC, cuando establece que los documentos que deberán acompañarse a la petición inicial podrán ser, o bien alguno de los previstos expresamente por el art. 812.2 LEC, o bien cualquier otro que constituya un principio de prueba del derecho del acreedor.

2.1.4.- Competencia

En primer lugar, la regulación de la competencia del proceso monitorio viene establecida en el art. 813 LEC. Así, dicho precepto atribuye competencia exclusiva al Juzgado de Primera Instancia, bien del domicilio o de la residencia del deudor, bien del lugar en que se pueda hallar a este último, en el supuesto de desconocerse los datos anteriores, excepto en el caso regulado por el art. 812.2.2º LEC, es decir, en el ámbito de propiedad horizontal, en que se atribuye también alternativamente competencia al Juzgado del lugar donde se encuentre la finca, de forma que el acreedor puede elegir este último para interponer la petición inicial, u optar por el Juzgado del lugar del domicilio o residencia del deudor.

Por tanto, respecto a la competencia objetiva, se atribuye competencia a los Juzgados de Primera Instancia, pero esta atribución de competencia lo es por razón de la materia, por lo que independientemente de la cuantía, y dejando de lado el art. 47 LEC sobre la competencia de los Juzgados de Paz, siempre van a conocer del asunto en el proceso monitorio los primeros. Por otra parte, además de la disposición expresa del art. 813 LEC referida a los Juzgados de Primera Instancia, jurisprudencialmente también se entiende que son competentes los Juzgados de lo Mercantil²³.

Respecto a la competencia territorial, se establecen, por un lado, tres fueros alternativos que son el lugar del domicilio del deudor, el lugar de su residencia, y el lugar donde se encuentra la finca en el supuesto de la propiedad horizontal; y, por otro lado, en defecto de no conocerse el domicilio o residencia del deudor, será competente el Juzgado del

²³ ABELLA LÓPEZ, J., “Oposición del..., op., cit., p. 3-5.

MARTÍN JIMÉNEZ, C. M., *Teoría y práctica del proceso monitorio. Comentarios y formularios*, LEX NOVA, Valladolid, 2013, p. 62-65.

lugar donde pueda ser hallado por el órgano jurisdiccional para efectuarle la comunicación del requerimiento de pago.

Así pues, el primer problema que puede surgir es que el deudor no se encuentre en el domicilio que se ha ofrecido en el escrito de la petición inicial, por lo que, en cuyo caso, para evitar en lo posible este tipo de situaciones, sería adecuado que se hiciera una referencia por parte del actor de todos los posibles domicilios sobre los que tenga conocimiento que estén situados dentro del partido judicial, o bien que facilite otros datos al órgano jurisdiccional para facilitar la tarea de este último consistente en investigar y hallar el domicilio del deudor, como por ejemplo el lugar de trabajo de este último, de forma que efectivamente pueda conocer del asunto el juzgado de lugar donde se encuentre el deudor, tal como dispone el art. 813 párrafo 1º LEC²⁴.

En este sentido, el art. 813 párrafo 3º LEC establece que, o bien si no se consigue averiguar el domicilio o residencia del deudor por el Letrado de la Administración de Justicia, o bien el deudor se encuentra en otro partido judicial, el proceso finalizará mediante auto del juez, pudiendo el acreedor instar un nuevo proceso ante el órgano jurisdiccional que sea competente. Respecto a la interpretación de este precepto, existen diversas teorías jurisprudenciales, siendo la mayoritaria la que defiende que la competencia puede determinarse posteriormente a la admisión de la petición inicial, una vez que se haya efectuado el requerimiento de pago al deudor, de forma que si no se ha podido hallar a este último en el domicilio señalado inicialmente por el acreedor, y no se le ha podido realizar, por tanto, el requerimiento de pago, conociéndose que se encuentra en otro domicilio situado en un partido judicial distinto, será competente el juzgado de este último, de acuerdo con el art. 813 párrafo 3º LEC, configurándose así como un fuero imperativo y no resultaría de aplicación el art. 411 LEC sobre no alteración de la competencia en caso de que se cambie el domicilio de las partes una vez que se ha comenzado el proceso.

La otra postura, minoritaria, defiende que la competencia debe determinarse en el momento de la admisión de la petición inicial, de forma que el escrito debe presentarse en el juzgado del lugar del domicilio o residencia del deudor, con independencia de que

²⁴ SILVOSA TALLÓN, J. M., “La respuesta jurisprudencial ante los problemas surgidos en el proceso monitorio”, *Revista Internauta de Práctica Jurídica*, 2008, p. 33

el requerimiento de pago deba hacerse en otro lugar distinto por circunstancias sobrevenidas, es decir, si el cambio de domicilio se ha producido en un momento posterior a la admisión de la petición inicial, seguirá siendo competente el juzgado del lugar del primer domicilio del deudor ante el que se presentó, por lo que se aplica el art. 411 LEC.

En cuanto a la determinación del domicilio, habrá que acudir a lo dispuesto al art. 40 CC para el supuesto de que el deudor sea una persona física, el cual establece que será el lugar de su residencia habitual, por lo que la residencia a la que se refiere el art. 813 LEC como fuero alternativo al domicilio habría que interpretarla como el domicilio designado por el demandado; y por otro lado, para el supuesto de que el deudor sea una persona jurídica, el domicilio será el lugar en que se encuentre establecida su representación legal, o donde se lleven a cabo las funciones principales, de acuerdo con el art. 41 CC; sin embargo, no resulta tan fácil aplicar un concepto de residencia para las personas jurídicas, de forma que para hacer efectiva el juego alternativo de fueros que propone el art. 813 LEC entre domicilio y residencia, habría que acudir a lo dispuesto por el art. 51 LEC, que establece que las personas jurídicas podrán ser demandadas en el lugar en que la relación jurídica de la que deriva el pleito haya nacido o surta efectos cuando dispongan de un establecimiento abierto al público o de un representante que esté autorizado para actuar en su nombre²⁵.

En segundo lugar, el art. 813 párrafo 3º LEC establece la declaración de oficio por el juzgado ante el que el acreedor presenta la petición inicial por ser incompetente territorialmente cuando no es posible averiguar el domicilio o residencia del deudor, o bien este se encuentra en un lugar de otro partido judicial. De esta forma, se ha interpretado inicialmente por el Tribunal Supremo, por un lado, que si una vez admitida a trámite la petición inicial del acreedor, y que, por tanto, se ha aceptado la competencia territorial del juzgado ante la que se ha presentado, se pone de manifiesto que el domicilio del deudor se localiza en un partido judicial distinto, habrá que llevar a cabo el archivo de las actuaciones (art. 813 párrafo 3º LEC) y no se aplicaría el art. 58 LEC, referente a la apreciación de oficio de la competencia territorial e inhibición a favor del juzgado que se considere territorialmente competente; y por otro lado, si en la misma petición inicial

²⁵ QUÍLEZ MORENO, J. M., *EL PROCESO MONITORIO: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la e-Justicia*, LA LEY, Madrid, 2011, p. 197-200.

se hace referencia a un domicilio situado en otro partido judicial, no se aplica el archivo de las actuaciones sino el art. 58 LEC²⁶.

No obstante, se ha producido un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo en el que se defiende que la apreciación de oficio de la incompetencia territorial en el supuesto del proceso monitorio goza de un régimen especial diferenciado del general establecido en el art. 58 LEC²⁷. Así, el art. 813 párrafo 3º LEC, aunque únicamente se aplica en casos de incompetencia territorial sobrevenida, no por ello implica una actuación distinta para cuando en la petición inicial se señala que el domicilio del deudor se encuentra en otro partido judicial; por tanto, en ambos casos se aplica lo dispuesto en dicho precepto, es decir, archivo de las actuaciones y no resulta de aplicación el art. 58 LEC²⁸.

En tercer lugar, en el proceso monitorio no cabe la sumisión tácita o expresa reguladas en la LEC con carácter general, tal como establece expresamente el art. 813 párrafo 2º LEC²⁹.

2.1.5.- Postulación

En lo que a la postulación se refiere, es decir, a la representación procesal por procurador y defensa técnica por abogado, en el proceso monitorio, el art. 814.2 LEC dispone expresamente que no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador para presentar la petición inicial, lo que hay que relacionar con los arts. 23.2.1º y 31.2.1º LEC, ya que en ambos preceptos se establece que las partes podrán intervenir sin procurador ni abogado en la petición inicial del proceso monitorio respectivamente.

Por lo tanto, la intervención de abogado y procurador tiene carácter voluntario, y en este sentido resulta de interés lo dispuesto en el art. 32.1 LEC cuando establece que en el supuesto de que la intervención de estos profesionales no sea preceptiva pero el actor opte por ella, deberá hacerlo constar en la demanda.

²⁶ Así se refleja en el Auto de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, de 5 de enero de 2010.

²⁷ En este sentido, puede verse el Auto de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2015.

²⁸ HOLAGADO MADRUGA, F., “La apreciación de oficio de la falta de competencia territorial en el juicio monitorio. Dos recientes y divergentes autos de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016, p. 2-3.

²⁹ Véanse los arts. 55 y 56 LEC, relativos a la regulación de la sumisión expresa y tácita respectivamente con carácter general.

Sin embargo, esta intervención no preceptiva deja de serlo, tal como establece el art. 818.1. párrafo 2º LEC cuando el deudor formula oposición, en cuyo caso, este escrito deberá ir firmado por abogado y procurador cuando la deuda que se reclame sea superior a 2.000 euros, es decir, cuando debido a la oposición del deudor, el asunto se acabe resolviendo a través del juicio verbal u ordinario si el importe es inferior o no a 6.000 euros respectivamente³⁰.

Igualmente, en el supuesto de que el deudor no se oponga y se inste el despacho de ejecución por el acreedor, será necesaria la intervención de abogado y procurador cuando la cuantía de la deuda reclamada sea superior a 2.000 euros, tal como establece el art. 539.1 párrafo 2º LEC.

2.1.6.- Inicio del procedimiento, desarrollo y formas de terminación

Conforme al art. 814.1 LEC, el proceso monitorio se inicia a través de un escrito de petición inicial a instancia del acreedor, en el cual se deberá hacer constar, por un lado, tanto sus datos personales e identificación como su domicilio o domicilios a efectos de notificaciones; y, por otro lado, los datos personales, identificación y cualquier circunstancia del deudor que resulte útil en caso de que el Letrado de la Administración de Justicia deba proceder a averiguar su domicilio, y el domicilio o domicilios o lugar en que resida o pueda ser localizado el deudor. Igualmente, resulta conveniente indicar también número de teléfono y/o direcciones de correo electrónico tanto del acreedor como del deudor para facilitar las comunicaciones³¹.

Además, el acreedor deberá hacer constar el origen de la deuda, es decir, los hechos de la que deriva de forma motivada, la cuantía que se debe, y los documentos acreditativos de la misma (art. 812 LEC).

³⁰ Véase los arts. 23.2.1º, 31.2.1º, y 250.2 LEC, relativos a la postulación y ámbito de aplicación por razón de la cuantía del juicio verbal.

³¹ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA). UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, “Guía sobre el Procedimiento Monitorio”, 2016, p. 3. En: *Poder Judicial España: Servicios: Atención Ciudadana: Modelos normalizados: El proceso monitorio: Guía sobre el Procedimiento Monitorio* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio>

Así pues, de acuerdo con el art. 814.1 párrafo 2º LEC, en coherencia con el fundamento de este proceso, se ponen a disposición del acreedor impresos y formularios para facilitar completar los datos exigidos por el párrafo primero de dicho artículo³².

Por otra parte, habrá que aportar tantas copias de la petición inicial y de los documentos que se acompañen junto a esta como deudores contra los que se dirija la reclamación³³.

Por último, hay que tener en cuenta el art. 2 a) Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que incluye como hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil la petición inicial del proceso monitorio, de tal forma, que siguiendo lo establecido en el art.4.1 c) y 4.2 a) de dicha ley, habrá que abonar la tasa correspondiente (100 euros) si el acreedor no es persona física cuando la cuantía de la deuda que se reclame sea superior a 2.000 euros, ya que si es inferior a esta cifra el pago de la tasa está exento. Así pues, la petición inicial del monitorio deberá ir acompañada también del justificante de pago debidamente validado del ingreso realizado por el acreedor (sujeto pasivo de la tasa) en el Tesoro Público conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas³⁴.

Una vez realizados estos trámites, para decidir la admisión a trámite de la petición inicial, hay que llevar a cabo un control sobre si concurren, por un lado, los requisitos exigidos por el art. 814 LEC, relativos al contenido que se debe hacer constar en el escrito de petición inicial; y por otro lado, los presupuestos necesarios para instar el proceso monitorio, como la competencia objetiva y territorial, que la deuda cumpla las exigencias examinadas anteriormente (art. 812.1 LEC), y que se acompañe a la petición inicial de los documentos correspondientes previstos en el art. 812 LEC donde se acredite la deuda que se reclama.

³² Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la modificación de la Instrucción 1/2002, de 5 de noviembre, por la que se aprueban los impresos normalizados para su presentación directa por los ciudadanos en los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

³³ Véase el art. 273.6 párrafo 2º LEC, referente a las copias de escritos y documentos.

³⁴ Véase el art. 7.1 Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que establece las cuantías de la cuota tributaria correspondiente a cada orden jurisdiccional.

Así pues, una vez comprobado que los documentos que se acompañan junto a la petición inicial, bien sea alguno de los previstos en el art. 812.2.1º LEC, o bien constituya un principio de prueba del derecho del acreedor, el Letrado de la Administración de Justicia, emitirá un requerimiento de pago dirigido al deudor para que, en un plazo de veinte días, o bien pague al acreedor la deuda por la que se le reclama, lo cual deberá acreditarse ante el órgano jurisdiccional, o bien comparezca ante este último y alegue mediante un escrito de oposición las razones por las cuales no debe la deuda que le es reclamada por el acreedor. Sin embargo, si no se cumple con los requisitos establecidos sobre el contenido de la petición inicial o no concurren los presupuestos procesales exigidos para instar el monitorio, los cuales claramente pueden ser subsanados, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez para que sea este último el que decida sobre la admisión o no de la petición inicial, en coherencia con lo establecido para el procedimiento declarativo ordinario en el art. 404 LEC y con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 Constitución Española)³⁵. En este último supuesto, si el juez acordara la inadmisión de la petición inicial, teniendo en cuenta el art. 206.1.2º LEC y el art. 455.1 LEC, el acreedor podría interponer un recurso de apelación contra el auto de inadmisión³⁶.

Por otra parte, y distinto a la inadmisión de la petición inicial, puede suceder que partiendo de los documentos aportados, se deduzca que la cuantía de la deuda que reclama el acreedor sea incorrecta, por lo que en este caso, la solución propuesta por el art. 815.3 LEC consiste en que el Letrado de la Administración de Justicia deberá dar cuenta al juez para que sea este último quien pueda solicitar al acreedor para que acepte o rechace una propuesta de requerimiento de pago por un importe inferior al que inicialmente formuló en el escrito de petición inicial. Esto se llevará a cabo por el juez en forma de auto y en dicha propuesta planteada al acreedor se deberá informar al mismo que se desestimará la petición inicial si no contesta en el plazo de diez días, o bien contestando, rechaza la misma.

Por tanto, y una vez admitido el escrito de petición inicial, el requerimiento de pago emitido por el Letrado de la Administración de Justicia, deberá notificarse de forma personal al deudor siguiendo la forma prevista en el art. 161 LEC, es decir, su

³⁵ Véase el art. 231 LEC, relativo a la subsanación de defectos.

³⁶ QUÍLEZ MORENO, J. M., *EL PROCESO MONITORIO: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la e-Justicia*, LA LEY, Madrid, 2011, p. 275.

comunicación se realizará en la sede del Juzgado o en el domicilio del deudor, amonestándole en su caso, si se niega a recibir el correspondiente requerimiento, informándole a su vez de que si insiste en esta negativa, el requerimiento quedará a su disposición en la Secretaría del Juzgado y se producirán los efectos propios de la comunicación (art. 815.1 párrafo 2º LEC). A diferencia de lo que sucede en propiedad horizontal que, en caso excepcional, se permite la comunicación mediante edictos, en el resto de situaciones, tal como señala el art. 815.1 párrafo 2º *in fine* LEC, este tipo de comunicación no está permitido. En este sentido, hay que tener en cuenta que a la hora de realizar la notificación del requerimiento de pago, si las averiguaciones que realice el Letrado de la Administración de Justicia acerca del domicilio o residencia del deudor no dan resultado o se descubre que se encuentra en un partido judicial distinto, el proceso monitorio se acaba en este momento no siendo posible seguir adelante, ya que el juez lo dará por finalizado mediante auto³⁷.

En cuanto al contenido del requerimiento de pago, habrá que hacer constar en el mismo una conminación al pago por parte del deudor de la cuantía de la deuda exacta reclamada e igualmente la posibilidad que tiene este último de formular oposición.

Además, deberá contener apercibimiento de que se despachará ejecución si no paga ni comparece formulando oposición³⁸.

Por otra parte, una de las importantes reformas que se han llevado a cabo de este proceso ha sido la incorporación de la posibilidad de control de oficio de cláusulas abusivas. En este sentido, el art. 815.4 LEC, establece que en el supuesto de que la deuda tenga su origen en un contrato celebrado entre un consumidor y un empresario o profesional, antes de emitir el requerimiento de pago, el Letrado de la Administración de Justicia deberá dar traslado al juez para que pueda llevar a cabo un control *ex officio* de las posibles cláusulas susceptibles de calificarse como abusivas que estén íntimamente relacionadas con el fundamento de la petición inicial o determinasen la cuantía de la deuda reclamada. De esta forma, si el juez, efectivamente, observa alguna de estas cláusulas, dará audiencia a las partes en un plazo de cinco días, para lo cual no es necesaria postulación, y si esto sucede así, dictará auto, susceptible de recurrirse por apelación acordando, o bien la

³⁷ Véase el art. 813 párrafo 3º LEC.

³⁸ ASECIO MELLADO, J. M., *Derecho Procesal Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 627.

continuación del proceso, pero dejando sin efectos tales cláusulas, o bien la improcedencia de la pretensión. En caso contrario, si el juez no aprecia ninguna de estas cláusulas, se procederá al requerimiento del deudor por el Letrado de la Administración de Justicia³⁹.

Pues bien, llega la parte interesante en la que todo está en manos del deudor, el cual durante un plazo de veinte días tras la emisión del requerimiento de pago y su comunicación, puede llevar a cabo diferentes actuaciones que procederé a explicar a continuación.

En primer lugar, el deudor puede optar al pago de la deuda que se le reclama por parte del acreedor, actitud que sin duda alguna sería deseable pero como analizaré más adelante no es la que más seguidores tiene. En este supuesto, el procedimiento es sencillo, porque tal como establece el art. 817 LEC, tras la acreditación de haberse realizado el pago, el Letrado de la Administración de Justicia dará por finalizado el proceso a través de decreto, archivándose las actuaciones.

En segundo lugar, el deudor puede optar por el extremo contrario, que sería aquel supuesto en que ni atiende el requerimiento de pago ni comparece, en cuyo caso, la solución también es fácil pero no tanto las consecuencias posteriores, ya que de acuerdo con el art. 816 LEC, el proceso finaliza por decreto del Letrado de la Administración de Justicia, decreto que a partir de este momento pasará a ser un título ejecutivo, y se va a dar traslado al acreedor para que, únicamente con la solicitud sin necesidad ni siquiera del transcurso del plazo de veinte días que señala el art. 548 LEC, inste despacho de ejecución y se proceda a la apertura del proceso ejecutivo contra los bienes del deudor en orden para satisfacer el pago la deuda reclamada, pero también de los intereses, en consonancia con el art. 576 LEC.

En este caso, tras el despacho de ejecución, el proceso seguirá por la vía ejecutiva ordinaria, otorgando de nuevo al deudor ejecutado la posibilidad de formular oposición,

³⁹ GONZÁLEZ PILLADO, E., “Problemática del juicio monitorio tras la Ley 42/2015, de 5 de noviembre de modificación de la LEC”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2017, p. 11-14.

RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., “Cláusulas contractuales abusivas y proceso monitorio”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016, p. 1-2.

pero teniendo presente que la terminación del proceso monitorio produce efectos materiales de cosa juzgada, de tal modo y manera que, ni acreedor ni deudor, podrán iniciar posteriormente un nuevo proceso declarativo ordinario con el mismo objeto y la misma causa.

En tercer lugar, atendiendo al art. 818 LEC, el deudor puede asumir una postura procesal más fuerte y formular oposición a la petición inicial presentando el correspondiente escrito de oposición dentro de plazo, es decir, veinte días. Dicho escrito de oposición deberá realizarse de forma escrita, es decir, no sirve la comparecencia oral del deudor⁴⁰; y además, por formulación expresa del legislador, deberá ir firmado por abogado y procurador si la cuantía de la deuda reclamada es superior a 2.000 euros. Por otra parte, en cuanto a su contenido, en el escrito deberán hacerse constar las razones de forma motivada, por las que el deudor considera que no debe abonar la deuda que se le reclama, ya sea en todo, o en parte⁴¹. Dichas razones o motivos de oposición, acudiendo a las reglas generales sobre el proceso de ejecución, podrán ser de fondo o procesales, pero si consisten en la existencia de pluspetición, habrá que acudir al art. 21.2 LEC, tal como reenvía el art. 818.1 párrafo 3º LEC⁴².

Llegado este momento, el proceso monitorio termina transformándose en un proceso declarativo ordinario, bifurcándose la tramitación del asunto en dos vías, bien el juicio ordinario, bien el juicio verbal, dependiendo, claro está, del importe de la cuantía de la deuda reclamada.

Así pues, el asunto se tramitará a través del juicio verbal cuando la cuantía de la deuda sea inferior a 6.000 euros, de acuerdo con los arts. 818.2 párrafo 1º y 250.2 LEC. En este supuesto, el proceso monitorio finalizará por decreto del Letrado de la Administración de Justicia y acordará la tramitación del asunto siguiendo las reglas previstas en la LEC para el juicio verbal. De igual forma, además se dará traslado de la oposición formulada por el deudor al acreedor, al cual se le ofrece la posibilidad de impugnarla en un plazo de diez días. Por otra parte, las partes podrán solicitar la celebración de la vista.

⁴⁰ SILVOSA TALLÓN, J. M., “La respuesta..., op., cit., p. 46.

⁴¹ Véase el art. 815.1 LEC.

⁴² Véanse los arts. 556–560 LEC sobre los motivos de oposición a la ejecución.

La otra vía prevista es la tramitación del asunto a través del juicio ordinario cuando la cuantía de la deuda reclamada sea superior a 6.000 euros (arts. 818.2 párrafo 2º LEC y 249.2 LEC). En este caso, el acreedor puede hacer dos cosas, o bien presentar demanda en un plazo de un mes contado a partir del traslado del escrito de oposición, en cuyo caso, en el decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia dando por terminado el proceso monitorio se acordará dar traslado de la misma al deudor, en este caso, demandado, siguiendo las reglas de los arts. 404 y siguientes (ss) de la LEC, excepto que dicha demanda no sea admitida a trámite, con lo que será el juez el que tenga que decidir sobre tal cuestión; o bien no presentar demanda, en cuyo caso, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto finalizando el proceso, de forma que se producirá el sobreseimiento de las actuaciones y la condena en costas al acreedor⁴³.

En ambos juicios, se han planteado varias cuestiones⁴⁴. Así, respecto al verbal, una de ellas es si el escrito de oposición del deudor vincula al acto de la vista, esgrimiéndose argumentos a favor en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª), de 16 de noviembre de 2005, y en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), de 29 de noviembre de 2006; sin embargo, hay autores que opinan de forma contraria. De igual forma, la Audiencia Provincial de Valencia admite que el actor pueda aportar nuevas pruebas documentales al proceso. Otra cuestión relevante es la posibilidad de reconvenición por parte del deudor en el escrito de oposición a la petición inicial, tal como defienden Audiencias Provinciales como la de Tarragona. Respecto al ordinario, se ha defendido que el tribunal competente para conocer de este último es el mismo ante el que se tramitó el proceso monitorio⁴⁵; y también se ha planteado si es posible incrementar la cuantía de la deuda reclamada inicialmente en el monitorio en la demanda del juicio ordinario, cuestión sobre la que se ha mostrado de forma positiva alguna audiencia⁴⁶; en cambio otras no han sido partidarias de esta postura⁴⁷.

En último lugar, el art. 818.3 LEC establece la tramitación del asunto a través del juicio verbal por razón de la materia en el supuesto de rentas debidas por el arrendatario de finca

⁴³ Véase el art. 278 LEC, relativo al cómputo de plazos en el traslado de copias y documentos.

⁴⁴ SILVOSA TALLÓN, J. M., "La respuesta...", op., cit., p. 49.

⁴⁵ Así se defiende en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 1ª), de 18 de mayo de 2004.

⁴⁶ En este sentido, puede verse el Auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 31 de marzo de 2004.

⁴⁷ Como ejemplo de esta postura, puede verse el Auto de la Audiencia Provincial de León, 24 de septiembre de 2002; y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 17 de marzo de 2003.

urbana cuando se formule oposición por este último, independientemente de la cuantía de la deuda que se reclame⁴⁸.

2.2.- Especialidades en propiedad horizontal

En primer lugar, hay que comenzar haciendo mención al art. 249.1.8º LEC, relativo al ámbito de aplicación del juicio ordinario, el cual establece que se tramitará siempre por este procedimiento, por razón de la materia, cualquier acción que la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (LPH), otorga a las Juntas de Propietarios y a estos últimos, excepto las que consistan única y exclusivamente en una reclamación de cantidad, las cuales se ejercerán a través del procedimiento que corresponda. En este sentido, están cubiertas por el juicio ordinario los procedimientos para la cesación de actividades prohibidas, adopción de acuerdos comunitarios e impugnación de los mismos⁴⁹.

En cuanto al procedimiento para las reclamaciones de cantidad, se podrá tramitar, bien por el proceso declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía de la cantidad reclamada, es decir, ya sea el juicio ordinario o el juicio verbal, bien por el proceso monitorio regulado en la LEC, pero atendiendo a las especialidades previstas en la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, el recurso al proceso monitorio es facultativo y así lo pone de manifiesto el art. 21.1 LPH, cuando emplea el término “podrá”.

Pues bien, el proceso monitorio, como modalidad en el ámbito de la propiedad horizontal, se introdujo por primera vez en España a través de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, regulándose en el art. 21 LPH⁵⁰.

En este sentido, dicho precepto establece que se podrá acudir al proceso monitorio para reclamar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 9 e) y f) LPH al propietario de la vivienda o local. Dichas obligaciones son, por un lado, contribuir a los gastos generales de sostenimiento del bien inmueble, así como servicios, cargas y

⁴⁸ Véase el art. 250.1. 1º LEC sobre el ámbito de aplicación por razón de la materia del juicio verbal.

⁴⁹ Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal («BOE» núm. 176, de 23 de julio de 1960).

ASENCIO MELLADO, J. M., *Derecho Procesal Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 519 - 521.

⁵⁰ Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal («BOE» núm. 84, de 8 de abril de 1999).

responsabilidades, conforme a la cuota de participación que corresponda a cada piso o local establecida en el título constitutivo de la propiedad por pisos o locales; y, por otro lado, la contribución al fondo de reserva existente en cada comunidad de propietarios.

Una vez producido el impago e incumplimiento de estas obligaciones, el presidente o administrador de la comunidad de propietarios podrá exigirlo acudiendo, facultativamente al proceso monitorio. En este caso, presupuesto imprescindible es el previo acuerdo de la Junta de Propietarios, por lo que, en primer lugar, se deberá celebrar una reunión extraordinaria de la Junta de Propietarios debidamente convocada que acuerde la aprobación de la liquidación de la deuda de un determinado propietario de un piso o local que tenga con la comunidad de propietarios por el secretario de esta última, con el visto bueno del presidente de la comunidad, así como la autorización al presidente o administrador para exigir el cumplimiento de la obligación judicialmente. Para la validez de dicho acuerdo, en primera convocatoria, basta con el voto mayoritario del total de los propietarios que representen la mayoría de cuotas de participación, y en segunda, con el voto mayoritario de asistentes a la reunión que representen más de la mitad de las cuotas de participación de estos. Una vez obtenido el acuerdo de la Junta de Propietarios, este deberá notificarse por escrito al propietario contra el que se dirige la reclamación en el domicilio designado por dicho propietario para notificaciones y citaciones relativas a aspectos de la comunidad, y en defecto de no conocer dicho domicilio porque lo haya cambiado y ya no resida en dicha comunidad y tampoco lo haya comunicado, se efectuará en el piso o local de la comunidad con efectos jurídicos plenos, independientemente de que se realice a un arrendatario del mismo. Así pues, si esto tampoco es posible, el acuerdo se expondrá durante un período de tres días naturales en el tablón de anuncios o en su defecto, en el lugar, de uso visible, en el que generalmente se informe de las convocatorias de la Junta o cualquier otro asunto relativo a la Comunidad. En este último caso, habrá que hacer constar la fecha y las razones por la que el acuerdo se comunica de este modo con firma del secretario de la comunidad, siempre, claro, con el visto bueno del presidente⁵¹. Además, por supuesto, el acuerdo deberá quedar reflejado en el libro de actas⁵².

⁵¹ Véanse los arts. 16.2 y 9.1 h) LPH, relativos a los requisitos para la validez de acuerdos en la Junta de propietarios, y disposiciones sobre notificaciones y citaciones respectivamente.

⁵² Véase el art. 19 LPH, relativo al libro de actas.

Si en un plazo de tres días, contados a partir de la notificación del acuerdo de la Junta de Propietarios, el propietario afectado no paga, habrá que hacer constar en un certificado el acuerdo de la Junta y el impago de la cantidad reclamada por el secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente⁵³.

En cuanto al escrito de petición inicial, las particularidades respecto al proceso monitorio regulado en la LEC son que la reclamación se podrá dirigir contra el actual propietario del piso o local, contra su anterior propietario cuando deba responder solidariamente, o contra el titular inscrito en el Registro de la Propiedad, pudiendo dirigir la petición inicial contra cualquiera de los obligados o contra todos de forma conjunta, tal como pone de manifiesto el art. 21.4 LPH. Además, a la hora de señalar la cuantía de la deuda reclamada, podrá exigirse también el importe de los gastos ocasionados si se ha realizado un requerimiento de pago previo al propietario deudor, en cuyo caso, se deberá acompañar a la petición inicial el justificante de tales gastos, así como la documentación acreditativa de haberse efectuado dicho requerimiento, por ejemplo, en el caso de envío de un burofax con acuse de recibo.

En cuanto a los documentos que deberán acompañar a la petición inicial del proceso monitorio son los siguientes: certificación del acuerdo de la Junta de Propietarios de la deuda y de su impago, que no necesitará de un examen de que constituye un principio de prueba, así como de la autorización al presidente de la comunidad o administrador para el ejercicio de la acción, ya que no es necesaria postulación, y de la condición como tal, la cual se acreditará mediante copia compulsada del libro de actas; documento en el que conste la notificación efectuada al deudor; nota simple del Registro de la Propiedad que acredite que el piso o local es propiedad de aquel al que se reclama la deuda; y justificante de los gastos producidos con ocasión de la realización del requerimiento de pago previo y de la documentación acreditativa del mismo⁵⁴.

⁵³ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA). UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, “Guía sobre el Procedimiento Monitorio para Comunidades de Propietarios”, 2016, p. 3. En: *Poder Judicial España: Servicios: Atención Ciudadana: Modelos normalizados: El proceso monitorio para comunidades de propietarios: Guía sobre el Procedimiento Monitorio para Comunidades de Propietarios* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio-para-comunidades-de-propietarios>

⁵⁴ Véase en este sentido el art. 812.2. 2º LEC.

SAN CRISTÓBAL REALES, S. “Especialidades del juicio monitorio en el ámbito de la propiedad Horizontal”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2009, p. 16.

Respecto a la competencia, hay que recordar que existe un fuero alternativo al domicilio o residencia del deudor, ya que el art. 813 LEC también atribuye competencia al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se encuentre la finca (*forum res sitae*).

Otra especialidad del proceso monitorio en el ámbito de la propiedad horizontal y que supone una excepción a la prohibición general establecida en el art. 815.1 párrafo 2º LEC, consiste en que el requerimiento de pago emitido por el Letrado de la Administración de Justicia tras la admisión a trámite de la petición inicial se podrá comunicar mediante edictos conforme al art. 164 LEC, si no pudiera efectuarse en el domicilio que hubiera designado el propietario deudor a efectos de notificaciones ni en el piso o local de la comunidad.

Una cuestión importante y que ha suscitado problemas en la práctica es la relativa a la legitimación activa para instar el proceso monitorio, la cual corresponde, evidentemente, a la comunidad de propietarios. Sin embargo, en este sentido, tal como dispone el art. 6.5º LEC, la comunidad de propietarios tiene capacidad para ser parte, como ente sin personalidad jurídica, pero atendiendo al art. 7.6 LEC, en lo que respecta a la capacidad procesal, para poder comparecer y actuar en juicio necesita la representación de una persona física que atribuye la ley.

Así pues, tienen legitimación activa para instar el proceso monitorio con las particularidades del art. 21 LPH, tanto una subcomunidad en un edificio que cuenta con varios portales o escaleras, como una agrupación de comunidades⁵⁵.

En cuanto a la representación de la comunidad de propietarios para la iniciación del proceso monitorio, del tenor literal del art. 21.1 LPH, se entiende que ostentan tal posición tanto el presidente como el administrador, a los que habrá que autorizar para el ejercicio de la acción, pero también serán los responsables de otorgar al procurador, en caso de optar por la intervención de abogado y procurador, el poder de representación procesal.

⁵⁵ Véase el art. 2 d) LPH, relativo al ámbito de aplicación de la LPH para las subcomunidades.

En este sentido, puede verse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4.ª), de 28 de octubre de 2015.

Véase el art. 24.3 LPH, relativo a la regulación de las agrupaciones de comunidades.

Así, cabe mencionar también la STS de 15 de abril de 2004 para el supuesto de las agrupaciones de comunidades.

La falta del acuerdo en el que se autorice al presidente o al administrador para la presentación de la petición inicial del proceso monitorio se entiende mayoritariamente por la jurisprudencia que es subsanable⁵⁶. Por otra parte, respecto al administrador, se entiende que, en el caso de no oposición por parte del propietario deudor, puede instar el despacho de ejecución; sin embargo, no está tan claro doctrinalmente que pueda representar a la comunidad en el proceso posterior a la oposición del deudor⁵⁷.

En cuanto a la legitimación pasiva, la petición inicial del proceso monitorio se dirige frente al propietario de un piso o local de una comunidad de propietarios que ha incumplido sus correspondientes obligaciones establecidas en el art. 9 e) y f) LPH. En este sentido, y siguiendo lo dispuesto en el art. 21.4 LPH, estará legitimado pasivamente tanto el propietario actual del bien inmueble como el anterior, en cuyo caso, la comunidad podrá exigir a este último el pago de la deuda que contrajo cuando era titular del inmueble, incluso si no debía tal cantidad, pero incumplió su obligación de notificar al secretario el cambio de titularidad del inmueble, por lo que será responsable solidariamente con el actual propietario, lo que se establece expresamente en el art. 21.4 y en el art. 9 i) párrafo 2º LPH, pero es más, también estará legitimado pasivamente el anterior propietario, incluso en el caso de que sí hubiera cumplido esta obligación, pero siga siendo el titular que aparece inscrito en el Registro de la Propiedad. Además, en el supuesto de que exista copropiedad del bien inmueble, la petición inicial podrá dirigirse contra cualquiera porque responden solidariamente o contra todos ellos, al igual que si el inmueble pertenece a la sociedad de bienes gananciales de un matrimonio, en cuyo caso, habrá que demandar a ambos cónyuges⁵⁸. En cualquier caso, tal y como dispone el art. 21.4 párrafo 2º LPH, podrá dirigirse contra cualquiera de los legitimados pasivamente o contra todos de forma conjunta.

Respecto a la postulación, siguiendo la regla general del art. 814.2 LEC, no es necesaria postulación para la presentación del escrito de la petición inicial pero el art. 21.6 LPH establece una especialidad en este ámbito que consiste en que si en dicho momento, la

⁵⁶ Así se ha defendido en la STS de 22 de diciembre de 2009 y STS de 21 de abril de 2006.

⁵⁷ FUENTES-LOJO RIUS, A., “Problemática práctica entorno a la legitimación activa en el procedimiento monitorio de reclamación de deudas comunitarias”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2017, p. 2-3.

⁵⁸ Véase el art. 9 i) párrafo 1º LPH sobre la obligación de comunicar el cambio de titularidad de piso o local.

SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Especialidades del...”, op., cit., p. 6-7.

comunidad de propietarios opta facultativamente por la intervención de abogado y procurador, el deudor deberá abonar junto a la cuantía de la deuda reclamada los honorarios del abogado y los derechos del procurador, tanto si atiende el requerimiento de pago como si opta por la incomparecencia. En el supuesto de que exista oposición por parte del propietario deudor, si la sentencia dictada en el proceso declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía posterior al proceso monitorio resulta estimatoria, se incluirán en las costas los honorarios del abogado y los derechos del procurador, incluso en el caso del juicio verbal en que no fuese preceptiva la postulación por tratarse de un importe inferior a 2.000 euros.

Finalmente, la última especialidad en el ámbito de la propiedad horizontal que contempla el art. 21 LPH en su apartado 5º consiste en que si el propietario deudor formula oposición, se podrá adoptar como medida cautelar el embargo preventivo de los bienes que sean suficientes para hacer frente a la deuda, intereses y costas sin necesidad de caución. A diferencia de la regulación del monitorio en la LEC, en este último caso, el legislador no ha hecho una mención expresa a la posibilidad de solicitar medidas cautelares; sin embargo, existen diversos pronunciamientos de Audiencias Provinciales que así lo defienden, partiendo de la naturaleza declarativa del proceso, o de una interpretación sistemática de la regulación de las medidas cautelares en un libro independiente a los procesos declarativos⁵⁹.

2.3- El procedimiento monitorio notarial

El procedimiento o “juicio” monitorio notarial se introduce en España a partir de la Disposición Final 11ª.1 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que modifica la Ley 28 de mayo de 1862 del Notariado (Ley del Notariado) introduciendo un nuevo Título VII relativo a la “Intervención de los Notarios en expedientes y actas especiales” que contempla el Capítulo IV, que versa “De los expedientes en materia de obligaciones”. Pues bien, dentro de este Capítulo, la Sección 2ª es la que se destina a regular este procedimiento en los arts. 70 y 71 Ley del Notariado⁶⁰.

⁵⁹ VIRZI, F., “Las medidas cautelares en el procedimiento monitorio”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016, p. 4-5.

Así, resulta de interés el Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 8 de noviembre de 2002 y el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, 23 de marzo de 2012.

⁶⁰ Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2015).
Ley 28 de mayo de 1862 del Notariado («BOE» núm. 149, de 29/05/1862).

Respecto a su naturaleza jurídica, partiendo de la ley que lo introduce en el ordenamiento jurídico español, se podría pensar que se trata de un acto de jurisdicción voluntaria; sin embargo, sigue siendo un proceso declarativo especial con la única característica de que se lleva a cabo sin intervención de la autoridad judicial, por lo que su justificación levanta serias dudas, ya que compite con el proceso monitorio regulado en la LEC, el cual se configura de forma especial para una rápida y eficaz protección del crédito; por tanto, el hecho de que en lugar de tramitarse por la Administración de Justicia, se haga acudiendo al Notario, no implica un gran ahorro, pues este fundamento es el que está ya detrás del monitorio regulado en la LEC, es decir, que facilite la tramitación del resto de procesos que exigen mayor tiempo⁶¹. Sin embargo, entiendo que, en ocasiones, ciudadanos que continuamente inician procesos monitorios en el Juzgado frente a deudores que habitualmente no cumplen sus obligaciones y que acaban desistiendo de ello, tal vez, si saben que pueden acudir al Notario, se lo puedan plantear porque lo consideren más sencillo, o simplemente más cercano que la tutela judicial; sin embargo, la mayoría de las personas desconocen que el Notario es competente para tramitar este tipo de procedimientos.

Así pues, el procedimiento monitorio notarial tiene carácter facultativo y alternativo al regulado por la LEC, en cuyo caso, si se opta por la primera vía, será competente cualquier Notario del lugar del domicilio o residencia habitual del deudor, o en su defecto, del lugar en que este último pueda ser hallado, tal como establece el art. 70.1 Ley del Notariado.

La deuda que se reclame tiene que ser dineraria, exclusivamente de naturaleza civil o mercantil, líquida, vencida, determinada y exigible, con independencia de su origen y cuantía, excepto las tengan su fundamento en un contrato con consumidores, las que se originen en el ámbito de la propiedad horizontal, las que versen sobre obligaciones de alimentos y aquellas en las que esté involucrada una Administración Pública (art. 70.1 párrafo 2º Ley del Notariado).

Respecto a los documentos requeridos, no hay ninguna novedad, salvo que, en coherencia con las excepciones anteriores, no se permiten las certificaciones de impago en el ámbito

⁶¹ CASADO RODRÍGUEZ E. P., “Sobre el novedoso «juicio monitorio notarial»”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2014, p. 5.

de la propiedad horizontal que se encuentran expresamente establecidas en el art. 812.2.2º LEC.

El procedimiento se inicia, por tanto, con la solicitud del acreedor sin necesidad, por supuesto, de postulación que, si es aceptada, el Notario autorizará acta notarial con los datos de los sujetos afectados y de los documentos aportados junto a la solicitud, y emitirá un requerimiento de pago al deudor para que este proceda a pagar al acreedor en un plazo de veinte días hábiles. En este caso, si no se localiza al deudor o no se puede efectuar la comunicación del requerimiento, termina el procedimiento, pudiendo el acreedor acudir a la vía judicial, pero si se realiza el requerimiento, el deudor podrá, bien comparecer ante el Notario y pagar, de lo cual quedará constancia en el acta que pasará a ser una carta de pago y el Notario entregará la cantidad al acreedor, bien pagar directamente a este último, en cuyo caso el procedimiento terminará con el cierre del acta, siempre que haya confirmación expresa del acreedor, ya que en caso contrario se cerrará acta pero podrá acudir a la vía judicial⁶².

Otra opción es la de comparecer y formular oposición, en cuyo caso, se comunicará al acreedor y se dará por terminado el procedimiento ya que habrá que acudir, con carácter facultativo a la vía judicial, tal como pone de manifiesto el art. 71.2 Ley del Notariado.

La última posibilidad es no comparecer y no oponerse, de lo cual se dejará constancia por el Notario, pero lo más importante es que el acta constituye el título de ejecución a efectos del art. 517.2.9º LEC, ejecución que se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido para los títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial⁶³.

3. OTROS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN PROCESAL DEL CRÉDITO EN ESPAÑA

3.1.- Procesos declarativos

Dentro de los procesos declarativos regulados en la LEC, podemos destacar en primer lugar, el proceso de desahucio de finca rústica o urbana arrendada por impago. Así, el art. 249.1.6º LEC, establece la aplicación del juicio ordinario por razón de la materia a

⁶² Véase en este sentido el art. 71.1 Ley 28 de mayo de 1862 del Notariado.

⁶³ Véase en este sentido el art. 71.3 Ley 28 de mayo de 1862 del Notariado.

aquellas demandas que versen sobre arrendamientos rústicos o urbanos de bienes inmuebles, salvo cuando se trate, bien de reclamaciones de rentas debidas o cantidades impagadas por el arrendatario, bien de demandas que pretendan el desahucio por falta de pago, es decir, que tengan fundamento en el impago de las rentas o cantidades adeudadas por el arrendatario, ya que estos dos últimos casos se tramitarán por el juicio verbal, estableciéndose así en el art. 250.1.1º LEC.

Así pues, el proceso de desahucio está regulado en los arts. 437 y ss LEC, pero se suceden una serie de reformas a través de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, aunque sin duda la modificación más importante se lleva a cabo por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, ya que a partir de este momento se aplicará la técnica monitoria al proceso de desahucio por impago, es decir, en semejanza con el proceso monitorio, una vez admitida la demanda que pretenda el desahucio por falta de pago de rentas adeudadas y efectuado el requerimiento de pago por el Letrado de la Administración de Justicia, regulado en el art. 440.3 LEC, si el arrendatario no paga, no desaloja el bien inmueble, o bien lo hace pero sigue sin pagar las rentas debidas, o no formula oposición en el plazo de diez días, se procede al lanzamiento, es decir, el demandante podrá instar el despacho de ejecución de forma directa. La última reforma de este proceso de desahucio se ha llevado a cabo por la Ley 4/2013 de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de las viviendas, que ha establecido la posibilidad de incluir en las costas las rentas debidas que se devenguen una vez presentada la demanda y hasta el momento en que se produzca la entrega de la posesión efectiva de la finca en caso de que el arrendatario no pague, no desaloje el inmueble y no formule oposición, o aunque produciéndose el desalojo, siga sin pagar, lo cual supone una diferencia importante con el proceso monitorio, en el que se excluían las deudas de futuro⁶⁴. De otra forma, el demandado puede formular oposición, en cuyo caso, se celebrará el acto de la vista del juicio verbal, o bien enervar la acción, es decir, pagar las

⁶⁴ Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo («BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2003).

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas («BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2013).

MARTÍ MARTÍ, J., “Características del juicio de desahucio tras las recientes reformas (Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización)”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2013, p. 4-11.

rentas o cantidades debidas y reclamadas al arrendador⁶⁵. Así, por tanto, se puede hablar de un proceso monitorio para el desahucio de finca arrendada por falta de pago⁶⁶.

Igualmente, cabe acudir al proceso monitorio con carácter facultativo y alternativo al proceso declarativo ordinario, en este caso, el juicio verbal por razón de la materia, para reclamar rentas o cantidades adeudadas por el arrendatario de una finca urbana, aunque si este formula oposición necesariamente habrá que tramitar el asunto a través del juicio verbal⁶⁷.

En segundo lugar, en cuanto al juicio cambiario, desde la promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, este proceso se reguló en los arts. 819-827, configurándose no ya como un proceso sumario y ejecutivo, sino como un proceso declarativo especial, de carácter facultativo y alternativo tanto al proceso declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía, bien el juicio ordinario, bien el juicio verbal, como al proceso monitorio, lo cual resulta especialmente útil cuando el título, por ejemplo, una letra de cambio, no cumple todos los requisitos exigidos en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (LCCh) pero, en cambio, sí constituye un documento que acredita una deuda, y por supuesto una relación o negocio jurídico, por lo que cumple el presupuesto documental exigido en el art. 812 LEC.

A diferencia del proceso monitorio, en el juicio cambiario se establece como presupuesto que el acreedor esté en posesión de un documento donde se acredite la deuda, pero este documento necesariamente tiene que ser una letra de cambio, cheque o pagaré que reúna los requisitos formales exigidos en la LCCh⁶⁸; y el proceso se inicia mediante demanda sucinta (art. 821 LEC), es decir, la prevista para el juicio verbal cuando no sea necesaria postulación⁶⁹.

⁶⁵ ASENCIO MELLADO, J. M., *Derecho Procesal Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 533.

⁶⁶ RODRÍGUEZ TIRADO, A.M., “El juicio «monitorio» de desahucio de finca arrendada por falta de pago del art. 440.3 LEC (modificado por Ley 37/2011)”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2012, p. 3.

⁶⁷ Así lo dispone el art. 818.3 LEC.

⁶⁸ Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque («BOE» núm. 172, de 19 de julio de 1985).

SANZ ACOSTA, L., “La controvertida naturaleza jurídica del juicio cambiario”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2010, p. 3-5 y 8-10.

Véase el art. 819 LEC, relativo al ámbito de aplicación del juicio cambiario.

⁶⁹ Véase el art. 437.2 LEC sobre la forma de la demanda en el juicio verbal cuando no es necesaria postulación.

Respecto a la competencia, esta se atribuye al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado (art. 820.1 LEC), y no se permite ni la sumisión tácita ni expresa (art. 820.3 LEC).

Otra diferencia con el monitorio es que, en este proceso, una vez admitida la demanda, el tribunal, que no el Letrado de la Administración de Justicia, podrá emitir un requerimiento de pago al demandado y a la vez, proceder directamente al embargo preventivo de sus bienes. Ante estas situaciones, el demandado podrá pagar en el plazo de diez días, solicitar el alzamiento del embargo, oponerse interponiendo demanda de oposición, o no formular oposición, en cuyo caso se dictará auto de despacho de ejecución por la cuantía de la deuda reclamada, es decir, aplicación de la técnica monitoria que rige el proceso monitorio y el proceso de desahucio de finca arrendada por falta de pago⁷⁰.

En último lugar, no hay que olvidar que el acreedor también puede acudir al proceso declarativo ordinario que corresponda para reclamar la cantidad adeudada por el deudor. Así, dependiendo de la cuantía de la deuda, podrá tramitar el asunto, bien a través del juicio ordinario, bien a través del juicio verbal. En este sentido, atendiendo al art. 249.2 LEC, se establece el ámbito de aplicación del juicio ordinario por razón de la cuantía para aquellas demandas que versen sobre deudas reclamadas que sean superiores a 6.000 euros; y por oposición, de acuerdo con el art. 250.2 LEC, se establece el ámbito de aplicación del juicio verbal por razón de la cuantía para aquellas demandas en las que se pretenda satisfacer un derecho de crédito inferior a 6.000 euros. Respecto al juicio ordinario, habrá que estar a lo dispuesto en los arts. 399-436 LEC, es decir, todo lo relativo a la demanda, contestación a la demanda, audiencia previa, juicio oral y práctica de las pruebas, y sentencia. En cambio, para el juicio verbal, habrá que seguir los arts. 437-447 LEC, que establecen los trámites de la demanda, con el contenido y forma previstos para el juicio ordinario, admisión y contestación a la demanda, acto de la vista y práctica de las pruebas, y sentencia⁷¹. En estos casos, el proceso declarativo ordinario correspondiente por razón de la cuantía resulta facultativo y alternativo al proceso

⁷⁰ FARRÉ ALEMÁN, J. M., “Juicio cambiario en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2001, p. 3.

⁷¹ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA). UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, “Guía sobre el Juicio Verbal”, 2016, p. 1 y 4-5. En: *Poder Judicial España: Servicios: Atención Ciudadana: Modelos normalizados: El juicio verbal: Guía sobre el Juicio Verbal* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-juicio-verbal->

monitorio para los supuestos generales, inclusive cuando se reclamen rentas o cantidades adeudadas por el arrendatario de una finca urbana (art. 818.3 LEC), y para los supuestos de propiedad horizontal; y al juicio cambiario.

3.2.- Procesos ejecutivos

Enlazando con lo anterior, no hay que olvidar que una vez concluido el proceso declarativo ordinario con la sentencia estimatoria del derecho de crédito del acreedor, para poder hacer efectivo dicho derecho, el acreedor deberá iniciar el proceso ejecutivo ordinario regulado en el Libro III LEC sobre la ejecución forzosa⁷². En este sentido, habrá que estar a lo dispuesto para la ejecución dineraria, regulada en los arts. 571-698 LEC, ya que el proceso de ejecución deriva de un título ejecutivo en virtud del cual se establece la obligación por parte del deudor o ejecutado de entregar una cantidad de dinero, pero teniendo presente los trámites generales establecidos para el proceso ejecutivo ordinario, es decir, demanda de ejecución, orden general de ejecución, despacho de ejecución, y oposición⁷³. Sin embargo, en esta modalidad de ejecución, puede suceder que el ejecutado no atienda el despacho de ejecución y orden posterior, en cuyo caso, se procederá al embargo de los bienes de este último con la finalidad de satisfacer los créditos del acreedor, aunque esta no sea la voluntad del ejecutado. De esta forma, una vez producida la traba de los bienes de acuerdo con las normas previstas en los arts. 584-633 LEC, hay que proceder a la realización forzosa de los mismos a través del procedimiento de apremio siguiendo las normas establecidas en los arts. 634-680 LEC, y así, las formas de realización encaminadas a la satisfacción del derecho de crédito son la entrega directa al ejecutante (art. 634 LEC), el convenio de realización (arts. 636 y 640 LEC), la realización por persona o entidad especializada (arts. 641 y 642 LEC), la subasta de bienes muebles e inmuebles (arts. 643-675 LEC), y la administración para el pago (arts. 676-680 LEC)⁷⁴.

En segundo lugar, respecto a los procesos ejecutivos, hay que destacar un procedimiento concreto que desde hace algunos años ha cobrado una enorme importancia, y no hacer

⁷² BRACHFIELD, P., “Análisis del proceso monitorio 2015”, 2015, p. 12.

En: ACCID: Documentación: Otros documentos: Análisis del proceso monitorio 2015 [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en

http://www.accid.org/documents/Centro_de_Morosologia_EAE__Analisis_del_proceso_monitorio_2015_-03_08_2015.pdf

⁷³ Véase el art. 571 LEC, y con carácter general, los arts. 549, 551 y 556 LEC sobre el ámbito de aplicación de la ejecución dineraria, la demanda ejecutiva, la orden general y despacho de ejecución, y oposición a la ejecución respectivamente.

⁷⁴ ASENSIO MELLADO, J. M., *Derecho Procesal Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 421 y 439-453.

mención a él en un trabajo dirigido a analizar los diferentes cauces existentes en nuestra legislación para la protección procesal del crédito, supondría obviar la realidad en la que estamos inmersos. Así, este procedimiento es el de ejecución hipotecaria de bienes inmuebles que, si bien sigue el proceso general de ejecución ordinario, presenta particularidades, regulándose en los arts. 681-698 LEC.

En este sentido, desde la crisis económica y financiera sufrida en España desde el año 2008, nuestro país se hizo eco de una situación que asolaba a numerosas personas y familias que, habiendo previamente contratado un préstamo hipotecario con la finalidad de acceder a una vivienda, desde hace unos años se ha generalizado el problema de no poder afrontar los pagos correspondientes de los préstamos, y con ello, la apertura de continuos procedimientos de ejecuciones hipotecarias que suponen el desahucio de dichas familias. En este contexto, inicialmente se promulgó el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, que incrementó el porcentaje de adjudicación del acreedor del bien inmueble hipotecado y la cuantía del salario mínimo susceptible de embargo; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, que introdujo la dación en pago en el procedimiento de ejecución hipotecaria; y el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, que estableció una moratoria de dos años para el lanzamiento cuando el objeto de la ejecución fuese la vivienda habitual⁷⁵.

Sin embargo, debido a la ineficacia de esta normativa, posteriormente se promulga la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, restructuración de la deuda y alquiler social, cuya medida estrella es la suspensión inmediata por un período de dos años de los lanzamientos sobre las viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión que conllevaría el desahucio de estas familias. De esta forma, el artículo 1 establece el ámbito de aplicación de la suspensión a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución

⁷⁵ Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa («BOE» núm. 161, de 7 de julio de 2011).

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos («BOE» núm. 60, de 10 de marzo de 2012).

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios («BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2012).

FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A.S., “Derecho a la vivienda y ejecución hipotecaria: valoración de las recientes reformas legales”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2015, p. 1.

hipotecaria de la vivienda habitual de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, como son los supuestos de familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo, unidades familiares con un menor de tres años o que cuenten con algún miembro con una discapacidad superior al 33%, o supuestos en los que el deudor se encuentre en desempleo, sea mayor de setenta años o exista violencia de género. Todo esto, sumado a una serie de requisitos que hay que cumplir (art. 1.3) y a la acreditación de los mismos (art. 2), hace que el procedimiento de ejecución hipotecaria pueda suspenderse temporalmente⁷⁶.

De esta forma, se establecen causas de suspensión que no se establecen en otros procesos como el de desahucio de finca arrendada por falta de pago o en el monitorio, y es que tal como se afirma en el Preámbulo, aunque la tasa de morosidad es baja, no se puede negar la existencia de situaciones dramáticas de personas y familias que no pueden pagar sus obligaciones y deudas, por lo que la crisis económica y financiera afecta a todos de una u otra forma, a unas personas, con la amenaza de ser desahuciadas de su vivienda habitual hipotecada, y a otras que tienen que saber que, bien sus bienes van a ser embargados en el monitorio, bien van a ser también desahuciados de la vivienda arrendada, y únicamente se ha pensado en los primeros.

Finalmente, hay que aclarar que la Ley 1/2013, de 14 de mayo, no sólo ha reformado el procedimiento especial de ejecución hipotecaria, sino también el procedimiento ordinario de ejecución dineraria, cuya regulación resulta de aplicación en defecto de la primera⁷⁷.

4. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN PROCESAL DEL CRÉDITO EN LA UNIÓN EUROPEA

En aras de facilitar las reclamaciones de deudas transfronterizas por parte de empresarios y particulares, y en última instancia de mejorar y no obstaculizar las relaciones en el tráfico comercial entre Estados miembros de la Unión Europea (UE), se han establecido

⁷⁶ Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social («BOE» núm. 116, de 15 de mayo de 2013).

REVETLLAT BALLESTÉ, I., “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios: la suspensión de los lanzamientos y el alquiler social”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2015, p. 4-7.

⁷⁷ Véase el art. 681.1 LEC.

MARTÍN PASTOR, J., “La Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2013, p. 1 y 3.

en el seno de esta distintos mecanismos para ofrecer una tutela judicial transfronteriza del derecho de crédito de los acreedores⁷⁸.

Así, en primer lugar, se promulga el Reglamento (CE) n° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. En este caso, se crea un proceso monitorio de carácter complementario y facultativo para el acreedor, de forma que puede optar por este último, por cualquiera existente en otro Estado miembro, o por otro que haya sido establecido por el Derecho Comunitario de la UE. En cuanto al ámbito material, este proceso se aplica en litigios transfronterizos en materia civil y mercantil para el cobro de créditos pecuniarios, de importe determinado, vencidos y exigibles, y sin límite máximo. Respecto al ámbito territorial, se aplica en todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca. En este sentido, el proceso se inicia con una petición de requerimiento de pago presentada en el formulario establecido ante el órgano jurisdiccional correspondiente, de acuerdo con las normas previstas en el Reglamento “Bruselas I *bis*”⁷⁹. Una vez examinada la petición y comprobados los requisitos exigidos, el órgano jurisdiccional expedirá un requerimiento europeo de pago que se notificará al deudor. A partir de este momento, las posibilidades del deudor son iguales a las previstas para el proceso monitorio regulado en la LEC, es decir, lo más destacable es que si opta por no pagar ni formular oposición, el requerimiento de pago adquiere fuerza ejecutiva y el demandante podrá iniciar el proceso ejecutivo correspondiente según las normas del Estado miembro de ejecución⁸⁰.

⁷⁸ GÓMEZ AMIGO, L., “La tramitación del proceso monitorio europeo en España”, *ARANZADI*, 2011, p.1.

⁷⁹ Reglamento (CE) n° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo («DOUE» núm. 399, de 30 de diciembre de 2006).

Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil («DOUE» núm. 351, de 20 de diciembre de 2012).

⁸⁰ PLANCHADELL GARGALLO, A., “El proceso monitorio europeo”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2013, p. 8-23.

Véanse en este sentido los arts. 2, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18 y 21 Reglamento (CE) N° 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

COMISIÓN EUROPEA (UNIÓN EUROPEA), “Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al proceso monitorio europeo”, 2011, p. 9-25. En: *Portal Europeo de e-Justicia: Acudir a los tribunales: Créditos pecuniarios: Procedimientos monitorios: Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al proceso monitorio europeo* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-es.do

En segundo lugar, se promulga el Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía. Las diferencias con el anterior proceso es que se establece un límite máximo de 2.000 euros ampliado desde 2015 a 5.000 euros, puede emplearse en demandas que no pretendan el pago de una cantidad monetaria, se inicia por demanda, es posible solicitar acto de vista oral, y el demandado podrá, bien contestar a la demanda o reconvenir, bien no contestar, en cuyo caso el órgano jurisdiccional dictará sentencia susceptible de ejecución⁸¹.

5. CONCLUSIONES

Tal y como señalé al principio al hablar del proceso monitorio, su introducción se justifica en una protección rápida y eficaz del derecho de crédito de los acreedores, configurándose como una vía adecuada para la reclamación de deudas no discutidas⁸².

Sin embargo, llega la hora de la verdad y la cuestión que hay que plantearse es si realmente consigue su objetivo. Para responder a esta pregunta no hay mejor forma que analizar la práctica diaria de los juzgados que se encargan de tramitar este proceso. Pues bien, las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que en el año 2016 ingresaron en total en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en España 537.054 procesos monitorios, se resolvieron 568.199 (teniendo en cuenta que en 2015 ingresaron 655.121 y quedaron pendientes de resolver 283.394 de años anteriores), y quedaron pendientes 259.075. En este sentido, la evolución del período 2015/2016 para los procesos ingresados es de -18,0, - 15,7 para los resueltos y - 8,6 para los que quedan pendientes de resolución. Así, aunque el número de procesos llevados a la Administración de Justicia haya disminuido respecto al año anterior, sigue siendo una

⁸¹ Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía («DOUE» núm. 199, de 31 de julio de 2007).

ESPINIELLA MENÉNDEZ, A., “La reforma de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016, p. 1.

ALFARO VALVERDE, L.G., “El proceso europeo de escasa cuantía”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2014, p. 5-15.

FERNÁNDEZ ROJAS, J. C. / SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, Thomson-Civitas, Navarra, 2016, p. 304-306.

COMISIÓN EUROPEA (UNIÓN EUROPEA), “Guía para los usuarios del Proceso europeo de escasa cuantía”, 2014, p. 9-25. En: *Portal Europeo de e-Justicia: Acudir a los tribunales: Créditos pecuniarios: Demandas de escasa cuantía: Guía para los usuarios del Proceso europeo de escasa cuantías* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-es.do

⁸² Apartado XIX párrafo 6º Exposición de Motivos Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

cifra astronómica que refleja su éxito entre los ciudadanos, sin duda, debido a su tramitación rápida y sencilla y al ahorro de gastos.

Por otra parte, en cuanto a las formas de terminación, las estadísticas señalan que en el año 2016 únicamente el 7,8% de los procesos terminó con el pago por parte del deudor, el 36,8% terminó con la incomparecencia y no oposición del deudor y la posibilidad de iniciar el proceso ejecutivo, el 6,5% finalizó con la oposición del deudor y tramitación del asunto a través del juicio verbal y el 1,6% mediante el juicio ordinario, y el 47,3% terminó con la inadmisión de la petición inicial por parte del Letrado de la Administración de Justicia. Estos datos demuestran que, aunque reciban un requerimiento de pago, la mayoría de deudores no atiende el mismo y al acreedor no le queda otro remedio que abrir el proceso ejecutivo si realmente quiere ver satisfecho su derecho⁸³.

Dicho esto, la eficacia del proceso monitorio, si se entiende como el pago efectivo por el deudor, no es muy elevada, ya que la mayor parte de estos procesos termina en la vía ejecutiva, y llegado este trámite, si el ejecutado es insolvente o no tiene bienes, bien porque realmente sea así y no puede hacer frente a sus obligaciones, bien porque lleva a cabo un alzamiento de bienes, el acreedor no va a ver satisfecho su derecho de crédito, por lo que el proceso monitorio se frustra en este aspecto.⁸⁴ Realmente, el éxito se debe al reforzamiento de la postura del acreedor, debido a que el deudor únicamente puede defenderse formulando oposición, de lo contrario, la actitud pasiva se castiga, de alguna forma, no dejándole otra vía de actuación que la de permitir necesariamente que se proceda al inicio de un proceso ejecutivo, y hasta este punto todo es perfecto; sin embargo el problema clave se encuentra en la insolvencia del deudor.

⁸³ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA), “La Justicia Dato a Dato - Año 2016”, 2016, p. 64 En: *Poder Judicial España: Temas: Estadística Judicial: Estadística por temas: Actividad de los órganos judiciales: Juzgados y Tribunales: Justicia Dato a Dato: Datos: Justicia Dato a Dato - Año 2016* [última consulta: 18-05-2018] Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Justicia-Dato-a-Dato/>

⁸⁴ Véase el art. 257 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («BOE» núm. 281, de 24/11/1995) sobre el delito de alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores.

6. BIBLIOGRAFÍA

- OBRAS Y ARTÍCULOS DOCTRINALES:

ABELLA LÓPEZ, J., “Oposición del deudor al proceso monitorio y posterior proceso declarativo: nexos y vinculaciones”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2014.

ALFARO VALVERDE, L.G., “El proceso europeo de escasa cuantía”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2014.

ASENCIO MELLADO, J. M., *Derecho Procesal Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

BRACHFIELD, P., “Análisis del proceso monitorio 2015”, 2015. En: ACCID: Documentación: Otros documentos: Análisis del proceso monitorio 2015 [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en

http://www.accid.org/documents/Centro_de_Morosologia_EAE__Analisis_del_proceso_monitorio_2015_-03_08_2015.pdf

CASADO RODRÍGUEZ E. P., “Sobre el novedoso «juicio monitorio notarial»”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2014.

COMISIÓN EUROPEA (UNIÓN EUROPEA), “Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al proceso monitorio europeo”, 2011.

En: *Portal Europeo de e-Justicia: Acudir a los tribunales: Créditos pecuniarios: Procedimientos monitorios: Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al proceso monitorio europeo* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-es.do

COMISIÓN EUROPEA (UNIÓN EUROPEA), “Guía para los usuarios del Proceso europeo de escasa cuantía”, 2014.

En: *Portal Europeo de e-Justicia: Acudir a los tribunales: Créditos pecuniarios: Demandas de escasa cuantía: Guía para los usuarios del Proceso europeo de escasa cuantías* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-es.do

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA), “La Justicia Dato a Dato - Año 2016”, 2016.

En: *Poder Judicial España: Temas: Estadística Judicial: Estadística por temas: Actividad de los órganos judiciales: Juzgados y Tribunales: Justicia Dato a Dato: Datos: Justicia Dato a Dato - Año 2016* [última consulta: 18-05-2018] Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Justicia-Dato-a-Dato/>

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA). UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, “Guía sobre el Juicio Verbal”, 2016.

En: *Poder Judicial España: Servicios: Atención Ciudadana: Modelos normalizados: El juicio verbal: Guía sobre el Juicio Verbal* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-juicio-verbal->

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA). UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, “Guía sobre el Procedimiento Monitorio”, 2016.

En: *Poder Judicial España: Servicios: Atención Ciudadana: Modelos normalizados: El proceso monitorio: Guía sobre el Procedimiento Monitorio* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio>

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ESPAÑA). UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, “Guía sobre el Procedimiento Monitorio para Comunidades de Propietarios”, 2016.

En: *Poder Judicial España: Servicios: Atención Ciudadana: Modelos normalizados: El proceso monitorio para comunidades de propietarios: Guía sobre el Procedimiento Monitorio para Comunidades de Propietarios* [última consulta: 18-05-2018]. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio-para-comunidades-de-propietarios>

CORREA DELCASSO, J. P., “El proceso monitorio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Revista xurídica galega*, 2000.

DAMIÁN MORENO, J., “El impacto del proceso monitorio en tiempos de crisis. Monitorialismo y panmonitorialismo”, *Revista El Cronista del Estado Social Y Democrático de Derecho*, 2014.

ESPINIELLA MENÉNDEZ, A., “La reforma de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016.

FARRÉ ALEMÁN, J. M., “Juicio cambiario en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2001.

FERNÁNDEZ ROJAS, J. C. / SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, Thomson-Civitas, Navarra, 2016.

FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A.S., “Derecho a la vivienda y ejecución hipotecaria: valoración de las recientes reformas legales”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2015.

FORTEA GORBE, J. L., “La reforma del proceso monitorio”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2015.

FUENTES-LOJO RIUS, A., “Problemática práctica entorno a la legitimación activa en el procedimiento monitorio de reclamación de deudas comunitarias”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2017.

GÓMEZ AMIGO, L., “La evolución del proceso monitorio. En particular, su reforma por la ley 42/2015, de 5 de octubre”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2017.

GÓMEZ AMIGO, L., “La tramitación del proceso monitorio europeo en España”, *ARANZADI*, 2011.

GONZÁLEZ PILLADO, E., “El juicio monitorio en España tras las últimas reformas procesales”, *Revista de Estudios de la Justicia*, 2012.

GONZÁLEZ PILLADO, E., “Problemática del juicio monitorio tras la Ley 42/2015, de 5 de noviembre de modificación de la LEC”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2017.

HOLAGADO MADRUGA, F., “La apreciación de oficio de la falta de competencia territorial en el juicio monitorio. Dos recientes y divergentes autos de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016.

MARTÍN JIMÉNEZ, C. M., *Teoría y práctica del proceso monitorio. Comentarios y formularios*, LEX NOVA, Valladolid, 2013.

MARTÍ MARTÍ, J., “Características del juicio de desahucio tras las recientes reformas (Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización)”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2013.

MARTÍN PASTOR, J., “La Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2013.

PLANCHADELL GARGALLO, A., “El proceso monitorio europeo”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2013.

QUÍLEZ MORENO, J. M., “El proceso monitorio: aspectos relativos a su fundamento y naturaleza Jurídica”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2011.

QUÍLEZ MORENO, J. M., *EL PROCESO MONITORIO: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la e-Justicia*, LA LEY, Madrid, 2011.

REVETLLAT BALLESTÉ, I., “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios: la suspensión de los lanzamientos y el alquiler social”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2015.

RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., “Cláusulas contractuales abusivas y proceso monitorio”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016.

RODRÍGUEZ TIRADO, A.M., “El juicio «monitorio» de desahucio de finca arrendada por falta de pago del art. 440.3 LEC (modificado por Ley 37/2011)”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2012.

SAN CRISTÓBAL REALES, S. “Especialidades del juicio monitorio en el ámbito de la propiedad Horizontal”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2009.

SANZ ACOSTA, L., “La controvertida naturaleza jurídica del juicio cambiario”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2010.

SILVOSA TALLÓN, J. M., “La respuesta jurisprudencial ante los problemas surgidos en el proceso monitorio”, *Revista Internauta de Práctica Jurídica*, 2008.

VIRZI, F., “Las medidas cautelares en el procedimiento monitorio”, *Revista Jurídica LA LEY*, 2016.

- NORMATIVA:

➤ **Normativa nacional:**

Constitución Española («BOE» núm. 311, de 29/12/1978).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («BOE» núm. 281, de 24/11/1995).

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE» núm. 174, de 22 de julio de 2015).

Ley 28 de mayo de 1862 del Notariado («BOE» núm. 149, de 29/05/1862).

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil («BOE» núm. 206, de 25/07/1889).

Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal («BOE» núm. 176, de 23 de julio de 1960).

Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque («BOE» núm. 172, de 19 de julio de 1985).

Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal («BOE» núm. 84, de 8 de abril de 1999).

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («BOE» núm. 7, de 08/01/2000).

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 2002).

Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo («BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2003).

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («BOE» núm. 266, de 4 de noviembre de 2009).

Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2009).

Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía («BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2011).

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal («BOE» núm. 245, de 11/10/2011).

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses («BOE» núm. 280, de 21/11/2012).

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social («BOE» núm. 116, de 15 de mayo de 2013).

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas («BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2013).

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2015).

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («BOE» núm. 239, de 6 de octubre de 2015).

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa («BOE» núm. 161, de 7 de julio de 2011).

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos («BOE» núm. 60, de 10 de marzo de 2012).

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios («BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2012).

Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación («BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 2003).

Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la modificación de la Instrucción 1/2002, de 5 de noviembre, por la que se aprueban los impresos normalizados para su presentación directa por los ciudadanos en los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

➤ **Normativa comunitaria:**

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores («DOCE» núm. 95, de 21 de abril de 1993).

Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales («DOCE» núm. 200, de 8 de agosto de 2000).

Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo («DOUE» núm. 399, de 30 de diciembre de 2006).

Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía («DOUE» núm. 199, de 31 de julio de 2007).

Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil («DOUE» núm. 351, de 20 de diciembre de 2012).

- **JURISPRUDENCIA:**

STS de 15 de abril de 2004

STS de 21 de abril de 2006

STS de 22 de diciembre de 2009

Auto de la Sala 1.^a del Tribunal Supremo, de 5 de enero de 2010

Auto de la Sala 1.^a del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2015

Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 17 de marzo de 2003

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 1ª), de 18 de mayo de 2004

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª), de 16 de noviembre de 2005

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), de 29 de noviembre de 2006

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª), de 28 de octubre de 2015

Auto de la Audiencia Provincial de León, 24 de septiembre de 2002

Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 8 de noviembre de 2002

Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª), de 14 de abril de 2003

Auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 31 de marzo de 2004

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, 23 de marzo de 2012